



Poder Judicial de la Nación

Oficio Electrónico Judicial - DEO N°:6023233

Tribunal: FBB - JUZGADO FEDERAL DE BAHÍA BLANCA 2 - SECRETARIA PENAL 6

Expediente: FBB 19913/2018 - IMPUTADO: LUCAIOLI, JUAN ÁNGEL Y OTROS
s/INFRACCION LEY 24.769

Destino: 60000000879 - AFIP - DGI - DIRECCIÓN REGIONAL BAHÍA BLANCA

Motivo: Estimados, por disposición de SS, la Dra. María Gabriela Marrón, se informa la resolución del día de ayer dictada en esta causa, en respuesta a su pedido de informe.
Saludos cordiales.



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

Causa N° 19913/2018

Bahía Blanca, de junio de 2022.

AUTOS y VISTOS:

Estos autos n° **FBB 19913/2018**, caratulados **“IMPUTADO: LUCAIOLI, JUAN ÁNGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769”**, traídos a resolver respecto de la situación procesal de **(1) Juan Ángel LUCAIOLI**, sin sobrenombres ni apodos; argentino; nacido el 20 de marzo de 1944 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; hijo de Humberto Lucaioli (f) y de Ana Aurelia Iratcet (f); DNI. n° 5.500.270; estado civil casado; con estudios secundarios completos; de ocupación comerciante; con domicilio real en calle San Andrés n° 90, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; **(2) María Elisa CHIODI**, apodada “Mari”, Italiana; DNIE n° 93.152.371; nacida el 11 de febrero de 1945 en Zomma Lombardo, Provincia de Varese, Italia; hija de Reimundo Chiodi (f) y de María Teresa Chiarello (f); de estado civil casada; de ocupación ama de casa; con instrucción secundaria completa; con domicilio real en calle San Andrés n° 90 de esta ciudad y de **(3) Paula Teresa LUCAIOLI**, apodada “Rusa”; argentina; DNI n° 21.717.130; nacida el 1 de julio de 1970 en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; hija de Juan Ángel Lucaioli (v) y de María Elisa Chiodi (v); de estado civil casada; de ocupación odontóloga; con estudios universitarios completos; con domicilio real en calle San Andrés n° 47 de esta ciudad y **(4) Antonella LUCAIOLI**; argentina; DNI 24.402.402; nacida el día 12 de marzo de 1975 en Bahía Blanca; de estado civil soltera; de ocupación docente, con estudios universitarios completos; hija de Juan Ángel Lucaioli; (v) y de María Elisa Chiodi (v), con domicilio real en la calle Arenales n° 3021 8 “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Y CONSIDERANDO:

I) ANTECEDENTES DE LA CAUSA

1) Que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia presentada por Carolina Daniela Álvarez el día 29/7/2018 (fs. 5/18), en su carácter de Jefa Interina de la Sección Cobranza Judicial a cargo de la División Jurídica de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP-DGI, poniendo en conocimiento la posible comisión del delito de apropiación indebida de tributos en veintidós hechos cometidos por la contribuyente CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. (CUIT n° 30688087720).

Consignó que la citada firma retuvo y no ingresó, en los términos legales correspondientes, importes de SICORE Ganancias, SICORE IVA y retenciones del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias, por un total de pesos cincuenta millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta centavos (\$50.419.360,70), entre los períodos fiscales 09/2016 al 08/2017 discriminados de la siguiente forma: **(1) SICORE Ganancias (Cód. 217) A** pesos un millón ciento cuarenta y un mil quinientos dieciséis con

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

diecinueve centavos (\$1.141.516,19), correspondiente al periodo fiscal 09 de 2016; **B)** pesos novecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y dos con treinta y un centavos (\$932.862,31) correspondientes al periodo fiscal 10 de 2016; **C)** pesos un millón setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos uno con un centavo (\$1.751.401,01) correspondiente al período fiscal 01 de 2017; **D)** pesos ochocientos cuarenta mil seiscientos sesenta con tres centavos (\$840.660,03), correspondiente al período fiscal 02 de 2017 **E)** pesos un millón ochocientos seis mil con cincuenta y seis con veinticuatro centavos (\$1.806.056,24) correspondiente al período fiscal 03 de 2017; **F)** pesos un millón doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta con cuarenta centavos (\$1.238.160,40) correspondiente al periodo fiscal 04 de 2017; **G)** pesos un millón setecientos noventa y nuevo mil ciento noventa y nueve con setenta y seis centavos (\$1.799.199,76) correspondiente al período fiscal 05 de 2017; **H)** un millón seiscientos seis mil cuatrocientos doce con cuarenta y cinco centavos (1.166.412,76), correspondiente al periodo 06 del 2017 ; **I)** pesos novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho con veinticuatro centavos (\$955.258,24) correspondientes al período fiscal 07 de 2017 **J)** pesos un millón setecientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro con cincuenta centavos (\$ 1.747.884,50) correspondiente al período fiscal 08 de 2017; **(2) SICORE IVA A)** pesos dos millones quinientos setenta y seis mil quinientos ochenta y uno con veinte centavos (\$2.576.581,20) correspondiente al período fiscal 10 del 2016; **B)** pesos cuatro millones trescientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco con veintiséis centavos (\$4.379.565,26) correspondiente al período fiscal 01 de 2017; **C)** pesos dos millones doscientos trece mil setecientos noventa y tres con cuarenta y ocho centavos (\$2.213.793,48) correspondiente al período fiscal 02 del año 2017. **D)** pesos cuatro millones quinientos ochenta y un mil trescientos trece con noventa y dos centavos (\$4.581.313,92), correspondiente al periodo 03 del año 2017. **E)** pesos tres millones quinientos mil ochocientos treinta y dos con noventa y cinco centavos (\$3.500.832,95), correspondiente al periodo 04 del año 2017; **F)** pesos seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos diez con cuarenta y un centavos (6.457.810,41), correspondientes al periodo 05 de 2017. **G)** tres millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y ocho con catorce centavos (\$3.851.698,14), correspondientes al periodo 06 de 2017; **H)** pesos tres millones ochocientos noventa y ocho mil once con setenta y seis centavos (\$3.898.011,76), correspondientes al periodo 07 del año 2017; **I)** pesos cinco millones trescientos seis mil trescientos noventa y cuatro con treinta y tres centavos (\$5.306.394,33), correspondiente al periodo 08 del año 2017; **(3) Retenciones art. 79 de la Ley de Ganancias A)** pesos ciento ochenta y seis mil seiscientos diecisiete con cincuenta y ocho centavos (\$186.617,58), correspondiente al periodo 10 del año 2016; **B)** pesos cuarenta y cuatro mil veintiséis con quince centavos (\$44.026,15), correspondiente al periodo 05 del año 2017;

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

C) pesos cuarenta y tres mil trescientos cuatro con treinta y nueve centavos (\$43.304,39), correspondiente al periodo 08 del año 2017.

Continuó expresando, que estos hechos fueron verificados a través de un análisis de los incumplimientos de la contribuyente llevada a cabo por el ente recaudador, habiendo sido la firma intimada fehacientemente a depositar los montos, y aun así, no lo hizo en el plazo legal.

En cuanto a la capacidad de pago, mencionó que la empresa no se encuentra exculpada con el concurso preventivo al que se encuentra acogida, siendo que los montos debidos fueron previamente retenidos, omitiéndose el depósito pertinente.

Además, enumeró una serie de cuentas bancarias de titularidad de la sociedad donde podría verificarse los saldos al momento del vencimiento de las obligaciones.

Por su parte, indicó que en el ejercicio fiscal 2016 Juan Ángel LUCAIOLI revistió el cargo de Presidente del Directorio, Paula Teresa LUCAIOLI el de Vicepresidente y María Elisa CHIODI el de Director Titular, iniciando sus mandatos el 1/12/2014, conforme el régimen de información de la AFIP.

Por último, acompañó prueba documental y sugirió prueba informativa.

2) A fs. 19/21 el Sr. Fiscal Federal comunicó la denuncia y requirió instrucción, conforme lo normado por los arts. 180 y 188 del CPPN. Seguidamente, las actuaciones fueron recepcionado en este Juzgado Federal nº 2, se registraron en el Sistema de Gestión Judicial LEX 100 y se dispuso la delegación de la investigación en el Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 196 del CPPN (fs. 22).

Comenzando la instrucción, el Agente Fiscal libró oficios a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; al Juzgado en lo Civil y Comercial nº 4 de esta ciudad y a distintas entidades bancarias, conforme lo sugerido por el ente recaudador en la denuncia (fs. 23), todo esto a fin de conocer la conformación de la sociedad, los estados contables de la misma, confirmar su capacidad de pago en los períodos indicados y obtener información sobre el proceso concursal que atraviesa.

De esta forma, fueron siendo incorporadas las respuestas a los requerimientos librados, como los distintos informes de los bancos sobre las cuentas de la firma señalada (fs. 46; 47; 48/65; 66/78; 79; 80/82; 84; 85/98; 100; 101/128; 129/130; 132; 133; 138/134; 147/154; 155/186; 187/255; 261 y 262/264). Así también las del Juzgado Civil y Comercial nº 4 y el Registro Público antes citado (fs. 99; 140/144 y 257).

3) Con apoyo en los elementos mencionados, el titular de la vindicta pública solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Juan Ángel LUCAIOLI, a Paula Teresa LUCAIOLI, a María Elisa CHIODI y a Antonela LUCAIOLI, al ser los representantes de CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. (fs. 265).

Este pedido fue concedido (fs. 267), fijándose audiencias para los días 7 y 8 de mayo del año 2019.

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

En primer lugar, declaró Juan Ángel LUCAIOLI (fs. 293/296), quien narró que por el año 2014 empezaron a sentir una crisis macroeconómica general, que empezó a afectar en la actividad que desarrollaban, a lo que se sumó un cambio de la modalidad de compra del cliente – compras por internet –.

Continuó expresando que esto les generó una caída importante en las ventas y empezaron a tener pérdidas económicas. Por ello, se fueron tomando medidas como la anulación del pago de horas extras, cierres de sucursales y una transformación en los años 2016 y 2017, que dejó sin trabajo aproximadamente a 200 empleados cada año.

Explicó que lo anterior les ocasionó una falta de fondos en efectivo, al tener que afrontar las indemnizaciones por los despidos, por lo que debieron vender propiedades y aportar personalmente dinero. Ante su gran endeudamiento, se les hacía difícil pagar los salarios de todo el personal, y allí fue que comenzaron a derivar los fondos que tenían que ser destinados al pago de impuestos para pagar sueldos y jornales, esto para poder seguir operando y así revertir la situación.

Sin embargo, manifestó que en octubre del año 2017 la situación fue inconcebible, y por eso entraron en un proceso concursal, no pudiendo encausar a la empresa a un equilibrio, cesando definitivamente la actividad de la empresa el 9/4/2019.

Aclaró que las medidas que se tomaron las definió solo, no teniendo los demás integrantes del directorio – que son su esposa e hijas – ningún tipo de injerencia en ellas.

Luego, fue el turno de las restantes imputadas, Antonela LUCAIOLI y María Elisa CHIODI, manifestaron que solo formaban parte del directorio por pedido de su padre y esposo, respectivamente, pero nunca ejercieron actividad alguna en la empresa ni tomaron decisiones (fs. 299/302).

Por su parte, Paula Teresa LUCAIOLI se abstuvo de declarar (fs. 297/298).

4) Más adelante, el 31/5/2019, el mismo organismo denunciante presentó una nueva denuncia por la presunta apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, por trece hechos en concurso real, entre los períodos junio y octubre del 2016 y febrero y septiembre del 2017 (fs. 398/411).

Señalaron que CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. retuvo y no ingresó, en el término de treinta días corridos, importes superiores a la condición objetiva de punibilidad prevista por el tipo penal descripto en el art. 7 del Título IX de la Ley 27.430, por un total de treinta millones setenta y dos mil novecientos tres con setenta centavos (\$30.072.903,70), en los períodos comprendidos entre junio y octubre de 2016 y febrero y septiembre de 2017.

Llegaron a esta conclusión, luego de realizar una fiscalización a la contribuyente, ordenada por la Orden de Intervención nº 1.655.698, en donde se inspeccionaron los libros y demás documentación de la empresa, además de recabar información a través de los sistemas informáticos del ente recaudador.

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

5) Esta nueva delación fue recibida en la Fiscalía Federal nº 2, y se le requirió instrucción al Juzgado Federal nº 1 de esta ciudad (fs. 412/414), registrándose bajo el nº FBB 7145/2019. El titular de ese Juzgado se declaró incompetente en razón del turno, remitiéndose los obrados a esta judicatura a mi cargo (fs. 415/418).

Una vez recibida, se aceptó la competencia atribuida y se delegó la instrucción en el Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 196 del CPPN (fs. 419).

A continuación, el Sr. Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal nº 2, previa solicitud *ad effectum videndi* del presente expediente FBB 19913/2018, solicitó que se le dé intervención a la Fiscalía Federal nº 1, atento a advertirse una conexidad subjetiva entre ambas (fs. 422).

Por ello, se le corrió vista a dicha dependencia, dictaminando su titular que debían acumularse esos actuados a esta causa. Así fue resuelto por la suscripta a fs. 425/426.

6) A su vez, en fecha 30/8/2019, representantes de la AFIP-DGI realizaron una nueva presentación ante la Fiscalía Federal nº 1, donde denunciaron a la misma firma por la apropiación indebida de tributos por trece hechos en concurso real (fs. 430/443).

Señalaron que la contribuyente habría retenido y no ingresado importes de SICORE Ganancias, SICORE IVA y de la retención del art. 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ascendiendo estos en conjunto a once millones cuarenta y seis mil doscientos setenta y tres con cuarenta centavos (\$11.046.273,40), entre los períodos 9/2017 a 2/2019, discriminados de la siguiente forma: **(1) SICORE Ganancias** (cod. 117) **A)** pesos un millón trescientos veintiocho mil quinientos setenta con setenta y cuatro centavos (\$1.328.570,74), correspondiente al período fiscal 09 de 2017; **B)** pesos un millón trescientos treinta y cinco mil ciento treinta y uno con diecisiete centavos (\$1.335.131,17), correspondientes al período fiscal 10 de 2017; **C)** pesos cuatrocientos doce mil ciento setenta y tres con treinta centavos (\$412.173,30), correspondiente al período fiscal 11 de 2017; **D)** pesos ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y uno con tres centavos (\$194.251,03), correspondiente al período fiscal 11 de 2018 **E)** pesos cuatrocientos catorce mil cuatrocientos treinta con cuarenta y nueve centavos (\$414.430,49), correspondiente al período fiscal 01 de 2019; **F)** pesos doscientos mil setecientos veintiocho con cincuenta y nueve centavos (\$200.728,59), correspondiente al período fiscal 02 de 2019; **(2) retención art. 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias A)** pesos ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y nueve con ochenta y dos centavos (\$156.979,82), correspondiente al período fiscal 10 de 2018; **B)** pesos ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos (\$178.537,52), correspondiente al período fiscal 11 de 2018; **C)** pesos trescientos cuarenta mil seiscientos treinta y seis con cuarenta y un centavos (\$340.636,41), correspondiente al período fiscal 12 del 2018; **D)** pesos ciento treinta y dos mil trescientos veintiocho con cuarenta y nueve centavos (\$132.328,49), correspondiente al

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

período fiscal 01 de 2019; **E)** pesos ciento treinta mil doscientos noventa y cinco con sesenta y nueve centavos (\$130.295, 69), correspondiente al período fiscal 02 de 2019; **(3) SICORE IVA A)** pesos cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos dos con ochenta y ocho centavos (\$4.546.202,88), correspondientes al período fiscal 09 de 2017; **B)** pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis con ochenta y nueve centavos (\$1.764.896,89), correspondientes al período fiscal 10 de 2017.

7) El Agente Fiscal presentó el correspondiente requerimiento de instrucción, solicitando allí mismo que se acumulen esas actuaciones a estos obrados, atento a la identidad subjetiva existente (fs. 444/446). Oportunamente fue concedido ese pedido (fs. 447/448).

8) Una vez cumplidas las acumulaciones ordenadas, se continuó con la instrucción solicitándose informes a los distintos bancos donde poseía cuentas la empresa y citando a prestar declaración testimonial a tres empleados de la empresa (fs. 451).

Respecto a esta última medida, se realizaron dos de las tres audiencias fijadas – al no poder ubicar a uno de los trabajadores en su domicilio para notificarlo –.

Primero se le recibió testimonio a Araceli Llamas Vara, quien contó que trabajó en la empresa desde el año 2003, jubilándose en agosto del año 2018. Mencionó que a ella siempre le pagaron, tanto su sueldo como la obra social. Asimismo, indicó que los dueños de la empresa eran Paula LUCAIOLI y su padre Juan LUCAIOLI (fs. 472).

Acto seguido, declaró María Celeste Visintin, quien afirmó que trabajó desde el año 2006 en la firma hasta mayo del 2019, cuando cesó sus actividades, en el área de recursos humanos. Recordó que la empresa empezó a tener problemas financieros en el año 2016, realizándose despidos masivos ese año y el próximo, pero destacó que no se dejaron de pagar salarios y siempre se priorizó a los empleados (fs. 473).

Ambos acompañaron copia de recibos de sueldos, la primera de algunos períodos del año 2017 y la segunda del año 2016.

Pasado un tiempo, fueron siendo recibidas y agregadas las respuestas de los distintos bancos oficiados en su oportunidad (fs. 480; 481/516; 521/522; 523; 524; 525/573; 574; 576/580; 581; 582; 583; 586/590; 592/605; 606/607; 608; 618/661; 663/664 y 666).

Después de esto, el titular de la vindicta pública petitionó que se cite a Juan Ángel LUCAIOLI, Paula Teresa LUCAIOLI y María Elisa CHIODI a prestar declaración indagatoria en relación a estos nuevos hechos denunciados (fs. 667). Este pedido también fue concedido, fijándose las audiencias correspondientes (fs. 683/684).

Primero declararon las sindicadas, quienes expresaron que no tomaban decisiones en la empresa y por eso no tenían conocimiento de los hechos que se le imputaban (fs. 694/699).





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

Luego, fue el turno de Juan Ángel LUCAIOLI, quien se remitió a la ya manifestado en la anterior audiencia y agregó que, en su momento, había tenido algunas audiencias con personal de la AFIP-DGI (fs. 702/704).

Finalizadas las audiencias, la causa volvió a la Fiscalía Federal nº 1 y seguidamente el titular de la acción pública solicitó que se dicte el procesamiento de María Elisa CHIODI y Juan Ángel y Paula Teresa LUCAIOLI por el delito de apropiación indebida de tributos por treinta y cinco (35) hechos en concurso real (fs. 709/711). Más tarde, amplió este pedido, solicitando se incorporen al requerimiento anterior la apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, en trece (13) hechos en concurso real (fs. 712).

Sin embargo, previo a resolver dichas peticiones, a fin de obtener un pronunciamiento conjunto – por razones de orden y economía procesal –, se le requirió al Sr. Fiscal Federal que se expida sobre la situación procesal de Antonela LUCAIOLI, indagada en fecha 8/5/2019 solo por los hechos de la primera denuncia de AFIP-DGI (fs. 299/300).

Ante esto, el titular de la vindicta pública insistió con el pedido de procesamiento de los primeramente nombrados, y, por otro lado, opinó que esta última debía ser sobreseída – en los términos del art. 336 inc. 4 del CPPN – ya que, de las constancias incorporadas al expediente, no surge que ella estaba involucrada en los hechos (fs. 774/776).

Por lo que, corresponde entrar a resolver la situación procesal de los encartados;

II) LOS HECHOS

En el marco del presente sumario, se endilga a los imputados los siguientes hechos: haberse apropiado de manera indebida de la retención del **(1)** impuesto a las ganancias por las sumas de **A)** pesos un millón ciento cuarenta y un mil quinientos dieciséis con diecinueve centavos (\$1.141.516,19), correspondiente al periodo fiscal 09 de 2016; **B)** pesos novecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y dos con treinta y un centavos (\$932.862,31) correspondientes al periodo fiscal 10 de 2016; **C)** pesos un millón setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos uno con un centavo (\$1.751.401,01) correspondiente al período fiscal 01 de 2017; **D)** pesos ochocientos cuarenta mil seiscientos sesenta con tres centavos (\$840.660,03), correspondiente al período fiscal 02 de 2017 **E)** pesos un millón ochocientos seis mil con cincuenta y seis con veinticuatro centavos (\$1.806.056,24) correspondiente al período fiscal 03 de 2017; **F)** pesos un millón doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta con cuarenta centavos (\$1.238.160,40) correspondiente al periodo fiscal 04 de 2017; **G)** pesos un millón setecientos noventa y nuevo mil ciento noventa y nueve con setenta y seis centavos (\$1.799.199,76) correspondiente al período fiscal 05 de 2017; **H)** un millón seiscientos seis mil cuatrocientos doce con cuarenta y cinco centavos (1.166.412,76), correspondiente al

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

periodo 06 del 2017 ; **I)** pesos novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho con veinticuatro centavos (\$955.258,24) correspondientes al período fiscal 07 de 2017 **J)** pesos un millón setecientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro con cincuenta centavos (\$ 1.747.884,50) correspondiente al período fiscal 08 de 2017 **K)** pesos un millón trescientos veintiocho mil quinientos setenta con setenta y cuatro centavos (\$1.328.570,74), correspondiente al período fiscal 09 de 2017; **L)** pesos un millón trescientos treinta y cinco mil ciento treinta y uno con diecisiete centavos (\$1.335.131,17), correspondientes al período fiscal 10 de 2017; **M)** pesos cuatrocientos doce mil ciento setenta y tres con treinta centavos (\$412.173,30), correspondiente al período fiscal 11 de 2017; **N)** pesos ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y uno con tres centavos (\$194.251,03), correspondiente al período fiscal 11 de 2018 **O)** pesos cuatrocientos catorce mil cuatrocientos treinta con cuarenta y nueve centavos (\$414.430,49), correspondiente al período fiscal 01 de 2019; **P)** pesos doscientos mil setecientos veintiocho con cincuenta y nueve centavos (\$200.728,59), correspondiente al período fiscal 02 de 2019; **(2)** del Impuesto al Valor Agregado por las sumas de **A)** pesos dos millones quinientos setenta y seis mil quinientos ochenta y uno con veinte centavos (\$2.576.581,20) correspondiente al período fiscal 10 del 2016; **B)** pesos cuatro millones trecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco con veintiséis centavos (\$4.379.565,26) correspondiente al período fiscal 01 de 2017; **C)** pesos dos millones doscientos trece mil setecientos noventa y tres con cuarenta y ocho centavos (\$2.213.793,48) correspondiente al período fiscal 02 del año 2017. **D)** pesos cuatro millones quinientos ochenta y un mil trecientos trece con noventa y dos centavos (\$4.581.313,92), correspondiente al periodo 03 del año 2017. **E)** pesos tres millones quinientos mil ochocientos treinta y dos con noventa y cinco centavos (\$3.500.832,95), correspondiente al periodo 04 del año 2017; **F)** pesos seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos diez con cuarenta y un centavos (6.457.810,41), correspondientes al periodo 05 de 2017. **G)** tres millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y ocho con catorce centavos (\$3.851.698,14), correspondientes al periodo 06 de 2017; **H)** pesos tres millones ochocientos noventa y ocho mil once con setenta y seis centavos (\$3.898.011,76), correspondientes al periodo 07 del año 2017; **I)** pesos cinco millones trecientos seis mil trecientos noventa y cuatro con treinta y tres centavos (\$5.306.394,33), correspondiente al periodo 08 del año 2017; **J)** pesos cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos dos con ochenta y ocho centavos (\$4.546.202,88), correspondientes al período fiscal 09 de 2017; **K)** pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis con ochenta y nueve centavos (\$1.764.896,89), correspondientes al período fiscal 10 de 2017; **(3)** de la retención artículo 79 ley de ganancias por las sumas de **A)** pesos ciento ochenta y seis mil seiscientos diecisiete con cincuenta y ocho centavos (\$186.617,58), correspondiente al periodo 10 del año 2016; **B)** pesos cuarenta y cuatro mil veintiséis con quince centavos (\$44.026,15),

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

correspondiente al periodo 05 del 2017; **C)** pesos cuarenta y tres mil trescientos cuatro con treinta y nueve centavos (\$43.304,39), correspondiente al período fiscal 08 del 2017; **D)** pesos ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y nueve con ochenta y dos centavos (\$156.979,82), correspondiente al período fiscal 10 de 2018; **E)** pesos ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos (\$178.537,52), correspondiente al período fiscal 11 de 2018; **F)** pesos trescientos cuarenta mil seiscientos treinta y seis con cuarenta y un centavos (\$340.636,41), correspondiente al período fiscal 12 del 2018; **G)** pesos ciento treinta y dos mil trescientos veintiocho con cuarenta y nueve centavos (\$132.328,49), correspondiente al período fiscal 01 de 2019; **H)** pesos ciento treinta mil doscientos noventa y cinco con sesenta y nueve centavos (\$130.295, 69), correspondiente al período fiscal 02 de 2019 y **(4)** los aportes de la Seguridad Social respecto a los dependientes de la firma “CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.” enumerados en el listado de fs. 401vta./402, por las sumas de **A)** pesos dos millones ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres con diecisiete centavos (\$2.135.743,17), correspondiente al período fiscal 06 de 2016; **B)** pesos dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro con noventa y tres centavos (\$2.554.134,93) correspondientes al período fiscal 07 de 2016; **C)** pesos dos millones ciento setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete con siete centavos (\$2.175.767,07) correspondiente al período fiscal 08 de 2016; **D)** pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis con cuarenta y seis centavos (\$1.985.966,46), correspondiente al período fiscal 09 de 2016 **E)** pesos un millón novecientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con sesenta y nueve centavos (\$1.963.644,69) correspondiente al período fiscal 10 de 2016; **F)** pesos dos millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa con sesenta y seis centavos (\$2.148.797,06) correspondiente al período fiscal 02 de 2017; **G)** pesos dos millones ciento once mil trescientos ochenta y dos con cuarenta y ocho centavos (\$2.111.382,48) correspondiente al período fiscal 03 de 2017; **H)** pesos dos millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y seis con ochenta y dos centavos (\$2.294.756,82), correspondiente al período 04 del 2017; **I)** pesos dos millones doscientos veinte mil trescientos noventa y seis con ochenta y ocho centavos (\$2.220.396,88) correspondientes al período fiscal 05 de 2017; **J)** pesos tres millones trescientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco con ochenta y siete centavos (\$ 3.391.945,87) correspondiente al período fiscal 06 de 2017; **K)** pesos dos millones trescientos ochenta y un mil seiscientos catorce con diecisiete centavos (\$2.381.614,17), correspondientes al período fiscal 07 de 2017; **L)** pesos dos millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos veintitrés con sesenta y cuatro centavos (\$2.349.323,64), correspondientes al período fiscal 08 de 2017; **M)** pesos dos millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis con ochenta y ocho centavos (\$2.359.436,88), correspondientes al período fiscal 09 de 2017. Las sumas liquidadas fueron retenidas y no fueron ingresadas al organismo recaudador por el

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

contribuyente “CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A” en el plazo establecido por el art. 6 de la ley 24.769 y sus modificaciones y los arts. 4 y 7 de la Ley 27.430, teniendo capacidad económica de pago para hacerlo, sociedad de la que Juan Ángel LUCAIOLI formó parte como Presidente del Directorio, Paula Teresa LUCAIOLI como Vicepresidenta del Directorio, María Elisa CHIODI como Directora Titular y Antonella LUCAIOLI como Directora Suplente.

III) ELEMENTOS PROBATORIOS

a) Denuncias presentadas por la AFIP-DGI de fs. 5/18, 398/410 y 430/443

b) Actuaciones de fs. 47, 48/78, 79, 81/82, 84/v., 85/98, 99/v., 100/v, 101/128, 129/130, 132/v., 133/v., 134/136, 138/v, 140/144v, 147/154, 155/186v, 187/255v, 257/v, 261/v, 262/264v, 475/480, 481/519, 523, 524, 525/573, 574, 576/580, 581, 582, 583, 586/590, 592/605, 606/607, 608, 618/661, 663/664 y 666.

c) Declaraciones testimoniales de fs. 472 y 473.

d) Efectos secuestrados reservados en el Fº 28/19 del libro de efectos de la Secretaría Penal nº 6.

IV) SITUACIÓN PROCESAL DE JUAN ÁNGEL LUCAIOLI, PAULA TERESA LUCAIOLI Y MARÍA ELISA CHIODI

Que, analizados los elementos de prueba detallados precedentemente entiendo que corresponde resolver la situación procesal de los sindicados, haciendo lugar parcialmente a lo solicitado por el Sr. Fiscal Federal.

En ese sentido, no comparto la conclusión alcanzada por el titular de la acción penal, respecto de la solicitud de procesamiento en relación a los períodos de mayo de 2017 y agosto de 2017 de la Retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias.

En consecuencia, corresponde, de conformidad con lo dispuesto, por un lado **decretar el procesamiento de los sindicados por los delitos de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social y apropiación indebida de tributos, en trece (13) hechos y treinta y tres (33) hechos, respectivamente, correspondientes a los periodos citados más arriba** (art. 306 del CPPN), con excepción de los períodos de mayo de 2017 y agosto de 2017 de la Retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias, por los que se resolverá el **sobreseimiento**, todo ello de acuerdo a los fundamentos que a continuación desarrollaré;

IV- 1) PROCESAMIENTO

IV- 1- A) VALORACIÓN PROBATORIA

1º) En primer lugar, surge de la denuncia de la AFIP-DGI y de la actuación nº 16711-240-2017 (fs. 11/17) que la firma “CASA HUMBERTO LUCAIOLI” fue constituida en fecha 8/5/1996 por Juan Ángel LUCAIOLI, Paula Teresa LUCAIOLI y María Elisa CHIODI, entre otros.

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

Los nombrados revistieron en la firma los cargos de Presidente del Directorio, Vicepresidente y Director Titular, respectivamente, desde el 30/11/2011 renovándose sus mandatos en el año 2014 y 2018, conforme surge del informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (fs. 99) y de los registros acompañados por el Ente Recaudador (fs. 190/193 de la actuación nº 16711-143-2019 y fs. 7/9, 288 y 4840vta. de la Orden de Intervención nº 1.655.698).

2º) En relación a los hechos denunciados por AFIP a fs. 5/18 y 430/443, constan en los expedientes administrativos acompañados por el mencionado organismo las declaraciones juradas en donde se consignaron las retenciones efectuadas por el contribuyente – como consecuencia de la calidad de agente de retención que ostenta la firma –, detalle de las operaciones que las originaron, el incumplimiento del ingreso de los montos y la intimación al pago notificada oportunamente (fs. 24/29, 30/89, 105/114 y 117/242 de la actuación de AFIP-DGI nº 16711-240-2017 y fs. 1/23 y 38/127 de la actuación de AFIP-DGI nº 16711-143-2019).

Por su parte, respecto a las sumas retenidas y no ingresadas de recursos de la Seguridad Social denunciadas a fs. 398/410, además de las declaraciones juradas indicando los montos, el ente recaudador realizó un análisis del libro de sueldos y jornales de la empresa, los recibos de sueldo de los empleados y las acreditaciones de las cuentas sueldos de estos, confirmando la efectiva retención de los recursos en los períodos investigados (fs. 2787/4122, CDs contenidos en sobre marrón adunado a fs. 4864 e informe final de fs. 4866/4870, todas de la Orden de Intervención nº 1.655.698).

Del mismo modo, se encuentran adunadas a los expedientes administrativos del organismo las intimaciones de pago notificadas por las sumas retenidas y no ingresadas (fs. 4223/4266 de la Orden de Intervención nº 1.655.698).

Esta documentación mencionada en los párrafos que anteceden, acredita tanto la efectiva retención de los montos adeudados, como el incumplimiento en su ingreso en el plazo establecido legalmente, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento general de sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, en cuanto a la capacidad de pago para afrontar estas obligaciones, de las investigaciones efectuadas por el organismo fiscalizador se evidenció que en el año 2016 y hasta el mes de septiembre del año 2017, la sociedad registró ventas mensuales por sumas desde sesenta y cuatro millones de pesos (\$64.000.000,00) (marzo de 2016) y hasta ciento cuarenta y dos millones de pesos (\$142.000.000,00) (diciembre de 2016), oscilando entre esas sumas en los distintos períodos (fs. 300/307 Actuación nº 16711-240-2017 de AFIP-DGI).

Adicionalmente, en referencia a los períodos fiscales denunciados en fecha 30/8/2019 por el ente recaudador (fs. 430/443), se indicó que en ellos las ventas fueron desde las sumas de ciento treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

seiscientos treinta y cinco pesos con quince centavos (\$136.442.635,15) (Octubre de 2017) hasta cuarenta y dos millones ochocientos noventa y un mil novecientos veintidós pesos con ochenta y seis centavos (\$42.891.922,86) (febrero de 2019) (fs. 173/185 de la Actuación nº 16711-143-2019 de la AFIP-DGI).

Asimismo, de los sistemas informáticos de AFIP-DGI se extrajo información sobre las acreditaciones bancarias de la empresa en los años 2016, 2017 y de los períodos entre octubre del año 2018 y abril del año 2019, resultando en los dos primeros años sumas superiores a doscientos diecinueve millones de pesos (\$219.000.000,00) (fs. 349/350 de la Actuación nº 16711-240-2017 de AFIP-DGI), y en el período citado en último lugar, montos mayores a veintiún millones de pesos (\$21.000.000,00), con excepción del mes de abril del año 2019 donde fueron de seis millones novecientos once mil ciento ochenta y cinco pesos (\$6.911.185,00), destacándose que, en ese lapso, existieron saldos positivos en todos los meses mayores a las sumas debidas (fs. 146/156 y 199/202 de la Actuación nº 16711-143-2019 de la AFIP-DGI).

A diferencia de lo anterior, en los demás períodos investigados en la mayoría de sus cuentas bancarias la contribuyente registró importantes saldos negativos, pero haciendo un análisis específico de las acreditaciones a las fechas de los vencimientos generales y el plazo para la consumación del delito achacado, se desprendieron saldos positivos en esos días, o en los inmediatamente anteriores o posteriores, en las cuentas bancarias que la sociedad posee en distintas entidades (ver fs. 51, 207, 496 del expediente principal y fs. 4321, 4360vta., 4371, 4380, 4385vta., 4393, 4412, 4428, 4432vta., 4438, 4443, 4456, 4476, 4488vta., 4500, 4505/vta., 4513, 4520/4521, 4525, 4533vta., 4543vta., 4548, 4552vta., 4555, 4559, 4561, 4570, 4586vta., 4593, 4598, 4602, 4604, 4607, 4620, 4626, 4631, 4634, 4638, 4642, 4646, 4651vta., 4656, 4664, 4673, 4685vta., 4696, 4699, 4705, 4720, 4721, 4723, 4728, 4733vta., 4745, 4762, 4769, 4771, 4772vta./4773, 4780, 4790/4791, 4795, 4800, 4802, 4804vta., 4809/4810, 4825, 4830 y 4833vta. de la Orden de Intervención nº 1655698).

Sumado a esto, se desprende de información aportada al fisco en el marco de la auditoría llevada adelante sobre la firma, que se hicieron pagos a proveedores, entre el mes de julio de 2016 y septiembre de 2017, ascendiendo en total a la suma de novecientos cinco millones ochocientos veintinueve mil ciento treinta y un pesos (\$905.829.131,00) (fs. 293/324 de la Orden de Intervención nº 1655698).

Así también, de los estados contables surge la adquisición de bienes de uso por un total de un millón ochocientos treinta mil seiscientos veinte pesos con noventa y cuatro centavos (\$1.830.620,94) y retiros por ochocientos treinta mil pesos (\$830.000,00) en concepto de honorarios a directores y de siete millones ciento diez mil doscientos veinticuatro pesos con ochenta y nueve centavos (\$7.110.224,89) por parte de los accionistas, en esos períodos. Por último, es destacable que la firma haya realizado compras

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

por la suma de un \$1.099.358.103,00 (fs. 4838, 4865 e informe final de fiscalización de fs. 4866/4870 de la Orden de Intervención nº 1655698).

A todo lo anterior, debe sumarse que el contribuyente realizó las retenciones aludidas, es decir que el dinero entró en su órbita de control en algún momento, pero no lo ingresó como estaba obligado, por lo que, más allá de sus estados contables, las sumas las tuvo en su poder en algún momento.

3º) Por su parte, si bien Juan Ángel LUCAIOLI, la primera vez que fue citado declarar – descargo al cual se remitió la segunda vez que fue llamado –, manifestó que se debió derivar los fondos destinados al pago de impuestos para pagar sueldos y jornales, al empezar a tener pérdidas económicas ocasionadas por una crisis macroeconómica general y otras causas, todo esto para contribuir a la paz social y así seguir operando, esto no resulta una justificación satisfactoria para conmovier este decisorio.

Más allá de si sus intenciones pudiesen ser buenas o justificadas, a su manera de ver, el dinero que no ingresó no era de su propiedad, no estando habilitado para disponerlo a su voluntad, sino que pertenecía al Fisco o al Sistema de la Seguridad Social, según el caso, recayendo en la firma que dirigía el mandato de retenerlo del contribuyente – supliendo de esta forma la labor del organismo recaudador –, para luego ingresarlo a las arcas del Estado.

Por lo que, estando obligado a cumplir esta manda legal, deliberadamente se desviaron los montos retenidos a pagos de los cuales era responsable CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. – sueldos y jornales de sus empleados –, utilizando fondos públicos para beneficio de la firma que presidía.

Resulta de interés traer a colación lo expresado por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico – en un caso donde se realizó un planteo similar al presente –, donde se expresó que las dificultades financieras invocadas por la sociedad, en cuanto se encontraba en concurso preventivo al momento del hecho incautado, no prueban el carácter necesario de la omisión de ingresar los aportes previsionales, pues el aprovechamiento de la atribución legal de retener parte de los haberes de los empleados, para eventualmente compensar aquella clase de situaciones, sólo muy excepcionalmente puede considerarse justificado por una situación de estado de necesidad disulpan¹.

Por su parte, María Elisa CHIODI y Paula Teresa LUCAIOLI, cuando fueron llamadas a declarar – la primera en ambas ocasiones y la segunda en la última, ya que en la primera se abstuvo de hacerlo –, indicaron que ellas no tenían participación en la administración de la empresa y que solo integraban el directorio de forma figurada.

Las excusas planteadas tampoco pueden prosperar. Las sindicadas integraban altos cargos jerárquicos en la firma, cobraban honorarios por su labor y estaban presentes en las asambleas de la empresa (ver fs. 288 de Orden de Intervención nº 1655698), por lo





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

que sus dichos parecen un intento de desligarse de la responsabilidad por estos hechos cometidos durante sus mandatos.

En este sentido, la misma Sala del organismo judicial antes citado tiene dicho que: “...la decisión de infringir la Ley Penal Tributaria no es, precisamente, una decisión menor o de poca relevancia, máxime cuando mediante la transgresión, *prima facie*, sólo la empresa aparecería beneficiada económicamente, por el contrario: es una decisión trascendente, de la mayor importancia, con relación a la cual no cabe concluir que se ha tomado y ejecutado sin que en aquélla haya intervenido, de manera decisiva (valga la redundancia), quien tiene funciones y tareas centrales de administración, y por lo tanto, en la toma de decisiones relevantes, como son, en este caso, las funciones y tareas relativas a las posiciones laborales que...ocupaba y desempeñaba al momento de los hechos investigados...”².

A lo que refiere a Paula Teresa LUCAIOLI, sumado a lo expresado anteriormente, en los testimonios recabados a María Celeste Visintin y a Araceli Llamas Vara – trabajadoras de la firma – la señalaron como dueña y autoridad de la empresa (fs. 472 y 473), contrariamente a lo afirmado por ella.

Por último, en cuanto al conocimiento y la voluntad de realizar la conducta ilícita, entiendo que de la declaración de Juan Ángel LUCAIOLI se desprenden las mismas, ya que en ella expresamente manifiesta que se desviaron los fondos destinados a pagar los impuestos.

Sumado a eso, no debe soslayarse que las conductas atribuidas se extendieron por un largo tiempo, en períodos fiscales consecutivos y siendo personas con una larga experiencia en el ambiente del comercio, resultando poco factible el desconocimiento de las obligaciones que tenían y de sus incumplimientos.

IV-1- B) CALIFICACIÓN LEGAL

En los términos del art. 308 *in fine* del CPPN corresponde realizar la **calificación legal** de los hechos atribuidos;

1º) Ley aplicable

La normativa que resulta aplicable a los hechos aquí investigados, es la contenida en la Ley 27.430 a la luz del criterio adoptado por totalidad de las Salas de la Cámara de Casación Penal de la Nación, relativo a la aplicación del principio de ley penal más benigna en materia de ilícitos tributarios.

Tal principio fue, en ese sentido, observado en todas las salas del Tribunal Superior referido (Sala I, causa nº 23942, “Cabrera, Eder Paolo s/ recurso de casación”, reg. Mº 887/2019, rta. 30/5/2019; Sala II, causa nº 57535 “Tavella, Aldana Florencia s/ recurso de queja”, reg. nº 1016/19, rta. El 21/5/2019; Sala III, causa nº 44918 “Viana, Stefanía s/

² CNAPE, Sala B, 15/6/2007, “Incidente de Apelación del auto de procesamiento de S. N. H. R. O. y G. A. B”, causa nº 56.166.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

recurso de casación”, reg. nº 711/19, rta. El 10/5/2019; Sala IV, causa nº 3017 “Eraso, Martín Andrés”, reg. nº 1034/19, rta. El 24/5/2019, entre otros).

En esa línea, recuérdese que la posición adoptada mayoritariamente por la Cámara Federal de Apelaciones local sobre el tema de marras, era solamente recogida por la Sala III.; toda vez que desde un primer momento, las salas I, II y IV suscribían a la aplicación del principio de ley penal más benigna.

Al respecto, la Sala I al resolver una cuestión sustancialmente análoga a la presente, señaló que: “... *por imperio constitucional – artículos 18 y 75 inciso 22 CN, 11.2 DUDH; 9 CADH; 15.1 PIDCyP– y prescripciones legales, corresponde en el caso la aplicación retroactiva del Régimen Penal Tributario (ley 27.430) en cuanto estableció el monto mínimo de \$100.000 para el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social (art. 9º de la ley 24.769, art. 7º del Régimen Penal Tributario, conf. art. 279 de la ley 27.430). En estas condiciones, avalar en esta instancia la continuación del trámite de la causa en contra de la doctrina ya sentada en torno a la atipicidad de las conductas de materia de reproche, por imperio del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, como pretende el representante del Ministerio Público Fiscal, sólo importaría un dispendio jurisdiccional innecesario.*”³

Asimismo, en idéntico sentido la Sala IV indicó que: “...*En el caso, la suma de dinero que se imputa como evadida en orden a la comisión del delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto a las ganancias por el período fiscal 2011 no alcanza el monto de \$ 1.500.000 pesos por cada tributo y cada ejercicio anual que, como elemento del tipo penal objetivo, contempla ahora la figura típica en cuestión en razón de la reforma operada por la ley 27.430; y, en idéntico sentido tampoco la suma de dinero imputada en concepto de Valor Agregado por el período fiscal 2011, alcanza el monto de \$ 2.000.000 pesos por cada tributo y cada ejercicio anual que, como elemento del tipo penal objetivo, contempla ahora la figura típica de evasión agravada en virtud de la reforma operada por la ley 27.430. Ley que debe ser aplicada retroactivamente en función del principio de ultraactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del CP y 9 de la CADH y 15 PIDCyP).*”⁴

Sin perjuicio de lo cual, a partir de las Acordadas 2/19 (27/5/19) y 7/19 (4/12/19) de la mencionada Cámara de Casación Penal – ambas posteriores a los pronunciamientos relatados al inicio –, se ha modificado la integración de la citada Sala III, quedando así en armonía la jurisprudencia de todas ellas (verificable en el Centro de Información Judicial).

Destáquese que esa ha sido también la postura emanada recientemente por ese órgano, al abocarse al tratamiento de un recurso de inaplicabilidad de la ley, donde los Dres. Ledesma, Figueroa y Yacobucci refirieron que: “... *En orden a su admisibilidad, no*

³ CFCP, Sala I, 20/09/2019, “Matronardi José Luis s/recurso de casación”, FBB nº 1968/2017/1/CFC1.

⁴ CFCP, Sala IV, 18/09/2019, “RICHBUT, Juan Carlos y otro s/ recurso de casación”, FBB nº 31000392/2012/3/CFC1. **Fecha Envío: 02/06/2022**





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

basta con demostrar que, en algún momento de la existencia histórica de esta Cámara, una de sus Salas haya dictado una sentencia cuya doctrina aparezca inconciliable con la sentencia por otra en la decisión que se pretende impugnar. Sólo es admisible el recurso de inaplicabilidad de ley para superar una contradicción actual entre la jurisprudencia constante de sus salas. A partir de la modificación de la integración de la Sala III en virtud de lo dispuesto por Ac. 2/19 y 7/19 CFCEP, la doctrina invocada con sustento en el art. 10, inc. b) de la ley 24.050 ha perdido vigencia y, en ese caso, la contradicción interpretativa alegada no es actual”.³

Así, los arts. 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, conforme Ley 27.430 presenta modificaciones en un elemento del tipo objetivo de la figura penal en cuestión, lo cual implica que para la configuración de los delitos investigados en autos – apropiación indebida de tributos y apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social – no deben depositarse, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo o los recursos retenidos o percibidos, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos (\$ 100.000) por cada mes.

Motivos por los que, de acuerdo a lo previsto en el art. 2 del CP, así como en las normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución (art. 9 CADH art. 15 TIDCP), corresponde aplicar al caso la Ley 27.430 por resultar la ley más benigna.

Por otro lado, debo destacar que el criterio sostenido desde los albores de la ley por la suscripta, fue recientemente acogido por la Sala II – Sec. 1 de la Cámara Federal de Apelaciones local en el marco de los autos nº FBB 2173/2021/1/CA1, caratulado: “Legajo de Apelación... en autos: MARCHESI, Sergio Oscar p/ Evasión Agravada Tributaria”.

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 28/11/2021, en los autos nº CPE 601/2016/CS1, caratulada: “VIDAL, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ Infracción Ley 24.769”, a cuyos argumentos me remito en mérito a la brevedad expositiva, habiendo tomado notorio estado público entre los operadores de justicia.

2º) Sobre los delitos achacados:

Las conductas atribuidas se subsumen en los delitos de “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social”, reprimidos por los arts. 4 y 7 de la ley 27.430, en treinta y tres (33) hechos y trece (13) hechos, respectivamente, todos en concurso real.

Atento a la similitud existente entre la estructura típica de los ilícitos mencionados, los mismos serán analizados en conjunto.

Como se mencionó anteriormente, se requieren ciertos elementos objetivos para configurar los injustos: treinta días corridos desde que venció la obligación de ingresar el tributo o recurso de la Seguridad Social y un monto mínimo retenido y no ingresado en el





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

período (mensual) de pesos cien mil (\$100.000.-), lo que constituye una de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad.

La conducta típica consiste en no depositar, total o parcialmente, en el plazo establecido, tributos o recursos ya retenidos, es decir que existen dos tramos para su consumación.

En primer lugar, se ha entendido que debe mediar para ello la efectiva retención o percepción, es decir, debe existir en términos reales la entrega o recepción de fondos por los sujetos obligados.

En segundo lugar, debe existir la omisión establecida, es decir el no deposito, perfeccionándose instantáneamente en el momento preciso en que el acto omitido debería haberse realizado, debiendo poseerse la capacidad real y económica para cumplir.

Las normas establecen un sujeto activo especial, solo pudiendo incurrir en los ilícitos los agentes de retención o percepción de tributos o el empleador en el caso de recursos de la Seguridad Social. A su vez, el art. 13 de la ley 27.430 establece en lo pertinente que: *“Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiera sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal,...la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes,...representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible...”*

En orden al aspecto subjetivo, es dable señalar que los mismos constituyen delitos dolosos. El dolo requiere del conocimiento por parte del agente responsable, de la existencia de una obligación próxima a vencer, y su decisión – cualquiera sea el motivo - de no efectuar el depósito que estaba obligado a realizar, por lo que la mera culpa que pudiese enrostrarse al contribuyente no configura el elemento subjetivo requerido por el tipo penal.

Conforme el análisis probatorio realizado más arriba, se puede concluir que se configura el elemento objetivo y subjetivo requerido por el tipo penal, ya que la empresa CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. – a través de los imputados como sus representantes – conocía su calidad de agente de retención, y podía cumplir con dichas obligaciones, sin perjuicio de ello, practicó las retenciones y no las ingresó en el plazo estipulado, superando la condición objetiva de punibilidad.

IV-1-C) LIBERTAD PROVISORIA

Que por la calificación legal efectuada en el párrafo precedente y la escala penal prevista por los arts. 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, conforme Ley 27.430 (de 2 a 6 años de prisión), como así también, al no advertirse riesgos procesales – peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación –, habiéndose presentado los imputados ante los llamados de la justicia y no existiendo medidas probatorias que pudieran entorpecer, entiendo que no corresponde adoptar ningún criterio restrictivo de la libertad de los imputados, por lo que el procesamiento se resolverá **sin prisión preventiva**, al no darse en el caso los requisitos enumerados por el art. 312 del CPPN, con la obligación de los

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

causantes de no ausentarse de su lugar de residencia sin conocimiento y/o autorización del juez de la causa (arts. 310 y 312 del CPPN).

IV-1-D) RESPONSABILIDAD CIVIL

Que de acuerdo a lo previsto en el art. 518 del CPPN y en función del temperamento adoptado en el presente auto, corresponde ordenar el embargo de bienes de los encartados en cantidad suficiente para garantizar la eventual indemnización y las costas. El monto debe procurar garantizar las eventuales y diversas obligaciones que impone el mencionado artículo y el cual es fijado de acuerdo a los hechos verificados en autos. Si bien en esta etapa del proceso todavía no puede precisarse con exactitud el monto correspondiente a los conceptos mencionados por aquella disposición, corresponde efectuar una estimación referente a la totalidad de aquellos gastos, de modo de garantizar el futuro cumplimiento de las obligaciones de carácter pecuniario que, eventualmente, pudieren fijarse en una hipotética sentencia condenatoria (arts. 533 y 534 del CPPN y art. 22 bis del CP). Dicho monto, prescindiendo de la situación personal de los mencionados, deberá atenerse a las pautas previstas y exigidas en el art. 518 del CPPN.

IV- 2) SOBRESEIMIENTO PARCIAL DE JUAN ÁNGEL LUCAIOLI, PAULA TERESA LUCAIOLI Y MARÍA ELISA CHIODI

El señor Fiscal Federal entendió que debe procesarse a los imputados por el delito de apropiación indebida de tributos por los restantes dos (2) hechos, es decir, los correspondientes a la Retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias de los periodos de mayo (\$44.026,15) y agosto (\$43.304,39) de 2017. Como señalé anteriormente, no comparto tal conclusión.

Teniendo en cuenta lo expresado al analizar la ley aplicable a los presentes hechos, es decir, que resulta aplicable al caso la Ley 27.430 por resultar la ley más benigna, y el monto mínimo para la consumación del delito de apropiación indebida de tributos establecido en ella, al no cumplirse ese requisitos en los mencionados períodos, se deberá decretar el sobreseimiento parcial de los sindicados, en los términos del art. 336 inc. 3º del CPPN, haciendo la declaración de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado las encartadas, respecto a esas conductas.

V) SITUACIÓN PROCESAL DE ANTONELLA LUCAIOLI

V-1) SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE DELITO

Conforme los argumentos vertidos más arriba, a los que me remito en honor a la brevedad, Antonella LUCAIOLI también debe ser sobreseída por inexistencia de delito (art. 336, inc. 3 del CPPN), en relación a las presuntas apropiaciones indebidas de tributos correspondientes a la Retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias de los periodos de mayo (\$44.026,15) y agosto (\$43.304,39) de 2017.

V-2) SOBRESEIMIENTO POR NO HABER PARTICIPADO EN EL DELITO

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

Conforme se asentó en el punto I de la presente resolución, Antonela LUCAIOLI fue indagada por los hechos denunciados por AFIP-DGI en su primera presentación (fs. 1/18).

Al momento de tener que expedirse sobre la situación procesal de la nombrada, el representante del Ministerio Público Fiscal opinó que debía dictarse su sobreseimiento, al no existir elementos que lleven a concluir que haya participado del delito que se le imputó

Entrando a resolver sobre este punto, comparto la conclusión a la que arribó el Agente Fiscal, debiendo resolverse el sobreseimiento total de Antonella LUCAIOLI por no haber participado en el delito que se le achacó (art. 336, inc. 4 del CPPN).

La encartada fue citada a prestar declaración indagatoria – a pedido del Ministerio Público Fiscal – en fecha 26/2/2019, allí, en el hecho que se le imputó se señaló que ella participaba en la empresa denunciada como Directora Suplente, conforme se desprendía del informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de fs. 99 (fs. 265/266 y fs. 299/300).

Ese cargo existe – conforme lo normado por Ley General de Sociedades – para, en los casos de que exista una ausencia o vacancia en los cargos titulares del Directorio, cubrir esos puestos, por ello el suplente no tiene otras responsabilidades ni obligaciones para con la sociedad más que eso, no integrando el órgano directivo.

Por eso, la doctrina ha afirmado que: “...la condición de ‘suplente’ de un órgano directivo del ente ideal no permite ni cumplir ni hacer cumplir los deberes fiscales de la sociedad anónima, toda vez que un directivo suplente carece de facultades decisorias y/o administrativas y/o representativas dentro de la sociedad y, por ende, no puede estar alcanzado por la responsabilidad del artículo 18 de la ley 11.683, sino precisamente excluido de ella...”⁵

Por lo que, no habiéndose constatados períodos de vacancia en donde la sindicada haya ocupado algún cargo en el Directorio de la empresa, es posible concluir que, al menos frente a las constancias que obran en el expediente, no tuvo participación en la administración de CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. y, por ende, no estuvo implicada en los hechos por los que fue indagada.

Por lo expuesto, oído que fue el Sr. Fiscal Federal y de acuerdo a las normas aplicables;

RESUELVO:

I) Decretar el PROCESAMIENTO de Juan Ángel LUCAIOLI, María Elisa CHIODI y Paula Teresa LUCAIOLI, cuyas demás circunstancias personales obran al inicio, por resultar autores *prima facie* responsables de los delitos previstos por los arts. 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, conforme ley 27.430 – “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social” –, en treinta y tres

⁵ BÁEZ, Julio C. y ROMERO VILLANUEVA, Horacio J.; *Introducción al Régimen Penal Tributario* Argentino, Buenos Aires, Ed. Encha, primera edición, 2019, p. 491.

Fecha Envío: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6

(33) y trece (13) hechos, respectivamente, todos en concurso real; **SIN PRISIÓN PREVENTIVA**, por quedar confirmada la libertad provisional en que se encuentran, no pudiendo ausentarse sin conocimiento y/o autorización del Juez (arts. 145; 306; 307; 308; 310; 312 y concordantes del CPPN).

II) FIJAR la SUMA de PESOS CINCO MILLONES (\$5.000.000,00), en concepto de responsabilidad civil y como garantía de las costas del proceso, en los términos del art. 518 del CPPN (conf. art. 63, 1er párr, Ley 24.946, art. 533 inc. 2 del CPPN, art 534 del CPPN, art. 22 bis del CP, art 533 inc. 3 del CPPN). Oportunamente, por tal cantidad se le hará la pertinente intimación de pago y/o dar bienes a embargo suficientes para satisfacer dicha suma, dentro de los cinco (5) días a contar desde dicha intimación. En caso de incumplimiento se librará "Oficio de Inhibición General de Bienes". Al efecto, servirá este auto de suficiente mandamiento que diligenciará el Secretario actuante.

III) SOBRESEER PARCIALMENTE a Juan Ángel LUCAIOLI, María Elisa CHIODI y Paula Teresa LUCAIOLI, cuyas demás circunstancias personales obran al inicio, por el delito de apropiación indebida de tributos, respecto a los períodos 05/2017 (\$44.026,15) y 08/2017 (\$43.304,39) de la retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo establecido en el art. 336 inc. 3 del CPPN, haciendo la declaración de que la formación del presente proceso – respecto a las supuestas infracciones mencionadas – no afecta el buen nombre y honor que hubieran gozado los nombrados (art. 336 *in fine* CPPN).

IV) SOBRESEER TOTALMENTE a Antonela LUCAIOLI, cuyas demás circunstancias obran en autos, por el delito de apropiación indebida de tributos, respecto a los períodos 05/2017 (\$44.026,15) y 08/2017 (\$43.304,39) de la retención del art. 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias, por inexistencia de delito, en virtud de lo establecido en el art. 336 inc. 3 del CPPN y, por los demás períodos que le fueron imputados, al no haber sido cometido por ella el delito, en los términos del art. 336 inc. 4 del CPPN, haciendo la declaración de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor que hubiera gozado la citada (art. 336 *in fine* CPPN).

V) REGÍSTRESE, notifíquese y, consentida o firme que sea, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia. Hágase saber lo aquí resuelto a la AFIP-DGI mediante DEOX, conforme lo solicitado a fs. 673/674.

MARÍA GABRIELA MARRÓN
JUEZ FEDERAL

Ante mí:





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6
SECRETARIA FEDERAL

En.....se protocolizó en el Sistema de Gestión Judicial LEX 100,
en.....se libraron cédulas de notificación a las partes y en.....se cumplió
con lo ordenado. Conste.

MARIA PAULA RIGANTI
SECRETARIA FEDERAL

Fecha Envio: 02/06/2022



#32195087#316280951#20220526092604424

